

John Rawls

**El derecho de gentes**  
y «una revisión de  
la idea de razón pública»

 **PAIDÓS**  
Barcelona • Buenos Aires • México



ricos en la concepción de los poderes de soberanía desde la Segunda Guerra Mundial. Primero, la guerra ya no es aceptable como medio de política gubernamental y se justifica sólo en casos de autodefensa o intervención en graves crisis de derechos humanos. Y segundo, hoy la autonomía interna del gobierno está limitada.

Los derechos humanos difieren de los derechos constitucionales, de los derechos de la ciudadanía democrática y de otros derechos pertenecientes a ciertas instituciones políticas tanto individualistas como asociacionistas. Los derechos humanos establecen un paradigma necesario pero no suficiente de decencia en las instituciones políticas y sociales del ámbito doméstico. En tal virtud, limitan la admisibilidad de la ley doméstica de las sociedades de buena fe en una razonablemente justa sociedad de los pueblos.<sup>3</sup> Por ello, esta clase especial de derechos humanos tiene tres funciones:

1. Su cumplimiento es condición necesaria de la decencia de las instituciones políticas y del orden jurídico de una sociedad (caps. 8-9).
2. Su cumplimiento es suficiente para excluir la intervención justificada de otros pueblos a través de sanciones diplomáticas y económicas o *ma-  
nu militari*.
3. Fijan un límite al pluralismo entre los pueblos.<sup>4</sup>

2. Véase la esclarecedora exposición de Judith Shklar sobre los derechos de la ciudadanía democrática en su *American Citizenship*, Cambridge, Harvard University Press, 1991, que hace hincapié en el significado histórico de la esclavitud.

3. Esta proposición se aclara si se distingue entre los derechos que se consideran humanos en varios instrumentos internacionales. Considérese: la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Primero, existen los derechos humanos propiamente dichos, ilustrados en el artículo 3: «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona» y en el artículo 5: «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes». Los artículos 3 a 18 reconocen los derechos humanos propiamente dichos. Segundo, hay derechos humanos que son implicaciones obvias de la primera clase de derechos. La segunda clase de derechos incluye los casos extremos descritos en las Convenciones contra el genocidio (1948) y contra el *apartheid* (1973). Estas dos clases comprenden los derechos humanos relacionados con el bien común, como se explica *supra*. En cuanto a otros derechos, resulta más apropiado llamarlos aspiraciones liberales, como el artículo 1 de la Declaración Universal de 1948: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». Otros parecen exigir ciertas instituciones, como el derecho a la seguridad social del artículo 22 y el derecho de mismo salario por trabajo igual del artículo 23.

4. Véase Terry Nardin, *Law, Morality, and the Relation of States*, Princeton, Princeton University Press, 1983, pág. 240, que cita a Luban, «The Romance of the Nation-States», *PA*, vol. 9, 1980, pág. 306.

10.3. *Los derechos humanos en los Estados criminales*. Los derechos humanos respetados por los regímenes liberales y jerárquicos deben ser considerados como derechos humanos universales en el siguiente sentido: son intrínsecos al derecho de gentes y tienen un efecto político y moral aunque no se cumplan en cada lugar. En otras palabras, su fuerza política y moral se extiende a todas las sociedades y obliga a todos los pueblos, incluidos los Estados criminales o proscritos.<sup>5</sup> Un Estado criminal que viola estos derechos ha de ser condenado y en casos graves puede ser objeto de sanciones e incluso de intervención. La justificada aplicabilidad del derecho de gentes resulta clara a la luz de nuestras reflexiones sobre los dos tradicionales poderes de soberanía (cap. 2.2), y lo que voy a decir sobre el derecho de asistencia confirmará el derecho de intervención o injerencia.

Podríamos preguntarnos con qué derecho los pueblos bien ordenados, liberales o decentes, están justificados para intervenir en un Estado criminal con el argumento de que ha violado los derechos humanos. Las doctrinas generales, religiosas o no, pueden fundar la idea de derechos humanos en una concepción teológica, filosófica o moral de la naturaleza humana. El derecho de gentes no sigue esta vía. Lo que denominamos derechos humanos constituye una cierta porción de los derechos de los ciudadanos de una democracia constitucional o de los derechos de los miembros de una sociedad jerárquica decente. Tal como hemos formulado el derecho de gentes para los pueblos liberales y decentes, estos pueblos sencillamente no toleran a los Estados criminales. Esta intransigencia es consecuencia del liberalismo y de la decencia. Si la concepción política del liberalismo político es justa y si los pasos que hemos dado para desarrollar el derecho de gentes son igualmente justos, entonces los pueblos liberales y decentes tienen el derecho, conforme al derecho de gentes, de no tolerar a los Estados criminales. Los pueblos liberales y decentes tienen muy buenas razones para mantener esta actitud. Los Estados criminales son agresivos y peligrosos; todos los pueblos están más seguros si dichos Estados cambian o son for-

5. Peter Jones, «Human Rights: Philosophical o Political», en Simon Caney, David George y Peter Jones (comps.), *National Rights, International Obligations*, Boulder, Westview Press, 1996, interpreta de manera que considero equivocada mi visión de los derechos en «El derecho de gentes», tal como se publicó en *De los derechos humanos*, Madrid, Trotta, 1998. Jones tiene razón al considerar que yo interpreto los derechos humanos como un grupo de derechos que tanto los pueblos liberales cuanto los pueblos jerárquicos reconocerían y respetarían, pero no es claro si los concibe como universales y aplicables a los Estados criminales.

zados a cambiar. De lo contrario, afectan hondamente al clima internacional de poder y violencia. Volveré sobre estos temas en la tercera parte sobre la teoría no ideal.<sup>6</sup>

6. En algún momento deberemos afrontar la cuestión de intervenir en Estados proscritos sólo por sus violaciones de los derechos humanos, aunque tales Estados no sean agresivos y peligrosos, sino más bien débiles. Volveré a este serio problema en los caps. 14-15, en mi exposición sobre la teoría no ideal.